

No. 36108

**Spain
and
Costa Rica**

Agreement on the promotion and reciprocal protection of investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Costa Rica (with exchange of notes of 17 September 1997 and 25 November 1997). San José, 8 July 1997

Entry into force: 9 June 1999 by notification, in accordance with article XII

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Spain, 3 September 1999

**Espagne
et
Costa Rica**

Accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica (avec échange de notes du 17 septembre 1997 et 25 novembre 1997). San José, 8 juillet 1997

Entrée en vigueur : 9 juin 1999 par notification, conformément à l'article XII

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne, 3 septembre 1999

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE
INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA**

El Reino de España y la República de Costa Rica, en adelante "las Partes Contratantes",

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países,

Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra,

y

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO I
DEFINICIONES**

A los efectos del presente Acuerdo:

1.- Por "Inversores" se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes Contratantes:

- a) personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes con arreglo a su legislación.

- b) empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, sociedades mercantiles y cualquier otra organización que se encuentre constituida o, en cualquier caso, debidamente organizada según el derecho de esa Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

2.- Por "inversiones" se designa todo tipo de activos que el inversor de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

- a) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades;
- b) obligaciones, créditos y cualquier otro derecho a prestaciones contractuales que tengan un valor económico. Los préstamos estarán incluidos siempre que estén vinculados a una inversión;
- c) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;
- d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor y derechos conexos; derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, denominaciones de origen o indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales, patentes y fondo de comercio o derecho de llave;
- e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de los recursos naturales.

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos o reinvertidos los activos no afectará su calificación de inversión.

Igualmente se considerarán inversiones las realizadas en el territorio de una Parte Contratante por empresas de esa misma Parte Contratante que estén efectivamente controladas por inversores de la otra Parte Contratante. Para mayor certeza, se considerará que una empresa de una Parte está efectivamente controlada por inversores de la otra Parte Contratante cuando estos últimos tengan la facultad de designar a la mayoría de sus directores o de dirigir legalmente de otro modo sus operaciones.

3.- El término "rentas de inversión" se refiere a los rendimientos derivados de una inversión e incluye, en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías y cánones.

4.- El término "territorio" designa el territorio terrestre, el espacio aéreo y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el derecho internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y preservación de los recursos naturales.

ARTICULO II PROMOCION Y ADMISION

1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la realización de inversiones en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2.- Con la finalidad de incrementar los flujos de inversión, cada Parte Contratante

se esforzará, a petición de la otra Parte Contratante, en informar a esta última de las oportunidades de inversión en su territorio.

3.- Cuando una Parte Contratante haya admitido una inversión en su territorio concederá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios en relación con dicha inversión así como los requeridos para la ejecución de contratos de licencia, de asistencia técnica, comercial o administrativa. Cada Parte Contratante concederá, de acuerdo con su legislación, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relación con las actividades de consultores o de personal cualificado o calificado, cualquiera que sea su nacionalidad.

4.- El presente Acuerdo se aplicará, a partir de su vigencia, también a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.

ARTICULO III PROTECCION

1.- Las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante deberán recibir en todo momento un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad. Ninguna de las Partes Contratantes deberá, en ningún caso, otorgar a tales inversiones un tratamiento menos favorable que el requerido por el Derecho Internacional.

2.- Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, el funcionamiento, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la venta o, en su caso, la liquidación de tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación que hubiere contraído en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante.

**ARTICULO IV
TRATAMIENTO NACIONAL Y CLAUSULA DE LA NACION
MAS FAVORECIDA**

1.- Una vez admitida la Inversión, cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones o rentas de inversión de inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las inversiones o rentas de inversión de sus propios inversores o a las inversiones o rentas de inversión de inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable al inversor.

2.- Este tratamiento no se extenderá, a los privilegios que una Parte Contratante pueda conceder a los inversores de un tercer Estado, en virtud de su asociación o participación, actual o futura, en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras instituciones de integración económica similar.

3.- El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no incluirá las ventajas de cualquier preferencia, tratamiento o privilegio que cualquiera de las Partes Contratantes pueda otorgar a las inversiones de sus propios inversores o a las inversiones de cualquier tercer Estado en virtud de un acuerdo internacional relacionado total o parcialmente con tributación, incluidos los acuerdos para evitar la doble imposición, o en virtud de cualquier legislación interna relacionada total o principalmente con tributación.

**ARTICULO V
NACIONALIZACION Y EXPROPIACION**

1.- Las inversiones o rentas de inversión de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos equivalentes (en adelante "expropiación") excepto que cualquiera de esas medidas se adopte por razones

de utilidad pública o interés público, conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2.- La indemnización será equivalente al justo valor de mercado que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adopte la medida de expropiación o antes de que la imminencia de la misma sea de conocimiento público, lo que suceda primero (en adelante "fecha de valoración"). La indemnización se abonará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible.

3.- El valor justo de mercado se calculará en una moneda libremente convertible, al tipo de cambio vigente en el mercado para esa moneda en la fecha de valoración. La indemnización incluirá intereses a un tipo comercial fijado con arreglo a criterios de mercado para dicha moneda, hasta la fecha de pago.

4.- El inversor afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en este artículo.

5.- Si una Parte Contratante expropria los activos de una empresa que esté constituida en su territorio de acuerdo con su legislación vigente y en la que exista participación de inversores de la otra Parte Contratante, la primera Parte Contratante deberá asegurar que las disposiciones del presente artículo se apliquen de manera que se garantice a dichos inversores una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

**ARTICULO VI
COMPENSACION POR PERDIDAS**

1.- A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, un estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento similar, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante conceda a sus propios inversores o a los inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable al inversor afectado. Los pagos que resultasen deberán ser libremente transferibles.

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Inciso 1 de este artículo, a los inversores de una parte Contratante que sufrieran pérdidas en cualquiera de las situaciones señaladas en dicho apartado en el territorio de la otra Parte Contratante a consecuencia de:

- a) la requisición de sus inversiones o de parte de sus inversiones por las fuerzas o autoridades de la última Parte Contratante; o
- b) la destrucción, no requerida por la necesidad de la situación, de sus inversiones o de parte de sus inversiones por las fuerzas o las autoridades de la última Parte Contratante,

se les concederá por la última Parte Contratante, una restitución o compensación adecuada, efectiva, en moneda libremente convertible y libremente transferible.

**ARTICULO VII
TRANSFERENCIAS**

1.- Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus

inversiones y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

- a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión;
- b) las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo I;
- c) los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión;
- d) las indemnizaciones y compensaciones previstas en los artículos V y VI;
- e) el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión;
- f) los sueldos y demás remuneraciones percibidas por el personal contratado en relación con una inversión;
- g) los pagos resultantes de la solución de controversias.

2.- Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán sin demora, en moneda libremente convertible al tipo de cambio de mercado vigente el día de la transferencia.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las Partes Contratantes podrán tomar medidas, de manera equitativa, no discriminatoria y de buena fe al amparo de su legislación relativa a evitar acciones fraudulentas y velar por el cumplimiento de obligaciones fiscales. Dichas medidas no podrán afectar la sustancia de los principios previstos en este artículo.

4.- Las Partes contratantes concederán a las transferencias a que se refiere el presente artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las transferencias de los pagos relacionados con las inversiones de inversores de cualquier tercer Estado.

5.- No obstante lo estipulado en el apartado primero del presente artículo, cada Parte Contratante, en circunstancias de dificultades excepcionales de balanza de pagos, podrá establecer controles temporales a las transferencias siempre y cuando se instrumenten medidas o un programa conforme a criterios internacionalmente aceptados. Estas limitaciones se establecerán por un período limitado, de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe.

ARTICULO VIII
CONDICIONES MAS FAVORABLES

1.- Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, o de las obligaciones emanadas del derecho internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultara una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo, en cuanto sea más favorable.

2.- Las condiciones más favorables que las del presente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO IX
PRINCIPIO DE SUBROGACION

Si una Parte Contratante o la agencia por ella designada realizará un pago en virtud de un contrato de seguro o garantía otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una inversión de cualquiera de sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá el principio de subrogación de cualquier derecho o título de dicho Inversor en favor de la primera Parte Contratante o de su agencia designada y el derecho de la primera Parte Contratante o de su agencia designada a ejercer, en virtud de

la subrogación, cualquier derecho o título en la misma medida que su anterior titular. Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante o la agencia por ella designada sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por indemnización o compensación a los que pudiese ser acreedor el inversor inicial.

ARTICULO X

SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1.- Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, por vía diplomática.

2.- Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje.

3.- El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses, desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera comunicado a la otra Parte Contratante de su intención de someter el conflicto a un tribunal de arbitraje.

4.- Si dentro de los plazos previstos en el apartado 3 de este artículo no se hubieran realizado los nombramientos necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes

contratantes las designaciones será efectuadas por el Miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.

5.- El tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de las normas contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho internacional.

6.- A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal establecerá su propio procedimiento.

7.- El tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquella será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

8.- Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del Presidente, serán sufragados por partes iguales por ambas Partes Contratantes.

ARTICULO XI
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSORES
DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1.- Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por al inversor a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible, las partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2.- Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis

meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el inversor podrá remitir la controversia:

- a) a los Tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión;
- b) a un tribunal de arbitraje internacional de los que se citan a continuación:
 - i) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél;
 - ii) en caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del C.I.A.D.I., la controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría del C.I.A.D.I.;
 - iii) a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las Partes Contratantes sea parte de C.I.A.D.I.

3.- Una vez que el inversor haya remitido la controversia a un tribunal arbitral, esta decisión será definitiva. Si el inversor hubiera sometido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, éste podrá, asimismo, recurrir a los tribunales de arbitraje mencionados en el presente artículo, siempre y cuando dicho tribunal nacional no hubiera

emitido sentencia. En este último caso el Inversor deberá adoptar las medidas que se requieran a fin de desistir definitivamente de la instancia judicial en curso.

4.- El arbitraje se basará en:

- a) las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros Acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes;
- b) el derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas a los conflictos de ley; y
- c) las reglas y los principios generalmente admitidos de Derecho Internacional.

5.- La Parte Contratante que sea parte en la controversia no podrá invocar en su defensa el hecho de que el inversor, en virtud de que un contrato de seguro o garantía, haya recibido o vaya a recibir una indemnización u otra compensación por el total o parte de las pérdidas sufridas.

6.- Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

**ARTICULO XII
ENTRADA EN VIGOR, PRÓRROGA, DENUNCIA**

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplidas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y será prorrogado indefinidamente salvo que alguna de las Partes Contratantes denuncie el mismo conforme al inciso 3 del presente artículo.

2.- Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

3.- Con respecto a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones contenidas en los restantes artículos de este Acuerdo seguirán estando en vigor por un período adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en dos originales en lengua española, que hacen igualmente fe, en San José de Costa Rica a 8 de julio de 1997.

POR EL REINO DE ESPAÑA



IGNACIO AGUIRRE BORRELL
EMBAJADOR DE ESPAÑA

POR LA REPUBLICA DE COSTA RICA



JOSE MANUEL SALAZAR KIRNACH
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

R.E.I.

Nºm.

NOTA VERBAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la Embajada de la República de Costa Rica en España y tiene el honor de referirse al Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Costa Rica, firmado en San José el pasado 8 de julio de 1997, en cuyo texto firmado (y también en el texto rubricado) se ha observado un error en la página 13 del mismo (se adjunta fotocopia).

Artículo XII punto 1 (al final)

Donde dice "... conforme al inciso 3 del presente artículo" debiera decir "...conforme al inciso 2 del presente artículo".

Si las autoridades de la República de Costa Rica están de acuerdo con esta corrección al texto firmado, y así lo manifiestan mediante Nota Verbal, este Canje de Notas permitirá corregir el texto del Acuerdo antes de su envío a las Cortes Generales de España para su ratificación y posterior publicación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Embajada de la República de Costa Rica el testimonio de su más alta consideración. ✓✓

Madrid, 17 de septiembre de 1997

A LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA EN MADRID



EMBAJADA DE COSTA RICA
P.º DE LA CASTELLANA, 164-17-A
28046-MADRID-ESPAÑA

Ref. N° 555/97

La Embajada de Costa Rica saluda muy atentamente al Ministerio de Asuntos Exteriores y, tiene el honor de referirse a la nota verbal n° 19/18 de 17 de setiembre de 1997. Al respecto se permite comunicarle la aprobación por parte de las autoridades costarricense, para que se lea correctamente el inciso 1) del artículo XII del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España. En anexo se acompaña fotocopia de la carta D.N.C.I.-143-97, suscrita el 9 de octubre de 1997 por el Señor Don Jaime Granados Brenes, Director de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y dirigida al Excmo. Señor Don Víctor Ibáñez-Martín Mellado, Embajador del Reino de España en San José, Costa Rica.

La Embajada de Costa Rica aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exteriores las muestras de su alta consideración.

Madrid, 25 de Noviembre de 1997



Al Ministerio de Asuntos Exteriores
Madrid

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
/SAN JOSÉ, COSTA RICA

San José, 09 de octubre de 1997
DNC-143-97

Su Excelencia
Señor Víctor Ibáñez-Martín Mellado
EmbaJador del Reino de España
San José, Costa Rica

Estimado Embajador:

Con ocasión de la nota verbal recibida por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, referente al error que se ha localizado en el Artículo XII inciso 1) del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España, tanto en el texto firmado como rubricado, deseo manifestar la anuencia de Costa Rica para que se incorpore la corrección propuesta.

De tal forma, la última frase del inciso 1) del Artículo XII se leería "...conforme al inciso 2 del presente artículo." Esta modificación se incorporará en el texto que se someterá para la aprobación legislativa y posterior publicación. Le ruego comunicar nuestra aprobación del mencionado cambio a sus autoridades.

Deseo aprovechar esta oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


Jaime Granados Brenes
Director de Negociaciones
Comerciales Internacionales



cc. Rose-Marie Karpinski de Murillo
Embajadora de Costa Rica, España
Luis Guillermo Solís
Director General de Política Exterior

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF
INVESTMENTS BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE
REPUBLIC OF COSTA RICA

The Kingdom of Spain and the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to strengthen economic cooperation for the mutual benefit of the two countries,

Intending to create favourable conditions for investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other, and

Recognizing that the promotion and protection of investments under this Agreement will encourage initiatives in this field,

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Agreement,

1. The term "investors" means, with respect to either Contracting Party:

(a) Physical persons who are nationals of one of the Contracting Parties in accordance with its legislation.

(b) Enterprises, meaning legal persons, including companies, groups of companies, corporations, trading companies and any other organization, whether or not for profit, provided that they are constituted or, in any event, duly organized under the law of that Contracting Party and have their head office or registered office in the territory of that Contracting Party.

2. The term "investments" means any kind of assets which an investor from one Contracting Party invests in the territory of the other Contracting Party and in particular, but not exclusively, the following:

(a) Shares, bonds, debentures and any other form of participation in companies;

(b) Rights involving debentures, claims or any other contractual benefit having economic value, including loans made for the purpose of investment;

(c) Movable and immovable property, as well as other real rights such as mortgages, pledges, usufructs and similar rights;

(d) Intellectual property rights, including copyright and related rights; industrial property rights, such as trademarks or trade names, names of origin or geographic indications, drawings, industrial models, patents and goodwill or commercial premium;

(e) Rights to engage in economic and commercial activities conferred by law or contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

No modification in the form in which assets have been invested or reinvested shall affect their status as investments.

This Agreement shall also apply to investments made in the territory of one Contracting Party by enterprises of that same Contracting Party which are effectively controlled by investors from the other Contracting Party. As an added guarantee, an enterprise of one Party shall be deemed to be effectively controlled by investors from the other Contracting Party where such investors have the power to appoint a majority of its directors or to otherwise legally manage its operations.

3. The term "returns on an investment" refers to the amounts yielded by an investment and includes in particular, but not exclusively, profits, dividends, interest, capital gains, royalties and fees.

4. The term "territory" means the land territory, the airspace and the territorial sea of each Contracting Party, together with the exclusive economic zone and the continental shelf beyond the limits of the territorial sea of each Contracting Party, over which it exercises or may exercise, in accordance with international law, jurisdiction and sovereign rights with regard to exploitation, exploration and protection of natural resources.

Article II. Promotion and acceptance

1. Each Contracting Party shall promote and create favourable conditions for investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accept such investments in accordance with its laws.

2. In order to increase the flow of investments, each Contracting Party shall, at the request of the other Contracting Party, make every effort to inform the requesting Party of investment opportunities in its territory.

3. When a Contracting Party has accepted an investment in its territory, it shall, in accordance with its laws and regulations, grant the necessary permits in connection with that investment, as well as those required for the execution of contracts relating to licences, and technical, commercial and administrative assistance. Each Contracting Party shall grant, in accordance with its legislation, as required, the necessary permits in connection with the activities of consultants or specialized personnel, regardless of their nationality.

4. This Agreement shall subsequent to its entry into force also apply to investments made prior to its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Article III. Protection

1. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall receive at all times fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security. Neither Contracting Party shall at any time grant such investments treatment less favourable than that required by international law.

2. Neither Contracting Party shall obstruct in any way, by unreasonable or discriminatory measures, the functioning, management, maintenance, use, enjoyment, sale or, where

appropriate, liquidation of such investments. Each Contracting Party shall fulfil any obligation entered into with respect to investments of investors of the other Contracting Party.

Article IV. Treatment as nationals and most-favoured-nation status

1. Each Contracting Party shall grant to investments or to the returns on investment of investors of the other Contracting Party in its territory, where such investments are accepted, treatment no less favourable than that accorded to the investments or returns on investment of its own investors or to the investments or returns on investments of any third State, whichever is more favourable to the investor.
2. The treatment shall not extend to the privileges which a Contracting Party may grant to the investors of a third State by virtue of its current or future association with or participation in a free-trade area, customs union, common market, economic and monetary union or any other similar economic integration institutions.
3. The treatment accorded under this article shall not extend to the advantages of any preference, treatment or privilege which a Contracting Party may grant to the investments of its own investors or to the investments of any third State under an international agreement relating in full or in part to taxation, including agreements for the avoidance of double taxation, or under any domestic legislation relating in full or principally to taxation.

Article V. Nationalization and expropriation

1. Investments or returns on the investment of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be subject to nationalization, expropriation or any other measure having similar effects (hereinafter referred to as "expropriation") except where any such measure is adopted for reasons of public interest or social benefit, in accordance with legal procedures, on a non-discriminatory basis and with payment of prompt, appropriate and effective compensation.
2. Such compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation measure was adopted or announced publicly, whichever comes first (hereinafter referred to as "date of valuation"). Compensation shall be paid without delay, and shall be effectively realizable and freely transferable.
3. The fair market value shall be calculated in freely convertible currency, at the market exchange rate for that currency on the date of valuation. Such compensation shall include interest at a commercial rate established with reference to market criteria for that currency from the date of expropriation to the date of payment.
4. The investor affected shall have the right, in accordance with the law of the Contracting Party responsible for the expropriation, to prompt review of his or its case by the competent judicial or other independent authority of that Contracting Party, in order to determine whether the expropriation and valuation of the investment were carried out in accordance with the provisions of this article.
5. If a Contracting Party expropriates the assets of an enterprise constituted in its territory in accordance with the law, in which investors of the other Contracting Party have invested, the former Contracting Party must ensure that the provisions of this article are

applied in such a way as to guarantee the prompt, adequate and effective payment of compensation to those investors.

Article VI. Compensation for losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments or returns on investment in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, rebellion, disturbance or any other similar circumstance, shall be accorded by way of restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to the investors of any third State, whichever is more favourable to the affected investor. Any such payments shall be freely transferable.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 of this article, investors of one Contracting Party who suffer losses in any of the situations mentioned therein, in the territory of the other Contracting Party, as a result of:

(a) Requisitioning of their investments or part thereof by the armed forces or authorities of the latter Contracting Party, or

(b) Unjustified destruction of their investments or part thereof by the armed forces or authorities of the latter Contracting Party,

Shall be granted by the latter Contracting Party adequate and effective restitution or compensation, in freely convertible currency. Payments made in that connection shall be freely transferable.

Article VII. Transfers

1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the unrestricted transfer of any payments in respect of their investments, in particular, but not exclusively, the following:

(a) The initial capital and any additional amounts necessary for the maintenance, expansion and development of the investments;

(b) Returns on an investment, as defined in article 1;

(c) Amounts necessary for the reimbursement of loans in connection with an investment;

(d) Indemnities and compensation as provided for in articles V and VI;

(e) Proceeds from the sale or liquidation, in full or in part, of an investment;

(f) Salaries and other remuneration received by personnel recruited for the purposes of an investment;

(g) Payments as a result of the settlement of disputes.

2. The transfers described in this Agreement shall be made promptly, in freely convertible currency at the market exchange rate valid on the date of transfer.

3. Without prejudice to the provisions of this article, the Contracting Parties may take equitable, non-discriminatory measures in good faith under its legislation to prevent fraud

and ensure compliance with fiscal obligations. Such measures may not affect the substance of the principles established in this article.

4. The Contracting Parties shall accord to the transfers referred to in this article treatment no less favourable than that accorded to transfers of payments arising out of investments made by investors of any third State.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, either Contracting Party, in circumstances of exceptional balance of payments difficulties, may establish temporary controls on transfers provided that measures or programmes based on internationally accepted criteria are put in place. These restrictions shall be imposed for a limited period of time, in an equitable and non-discriminatory manner and in good faith.

Article VIII. More favourable terms

1. If the law of either Contracting Party, or the current or future obligations under international law outside the framework of the present Agreement between the Contracting Parties, should give rise to general or specific rules by virtue of which the investments of investors of the other Contracting Party are accorded treatment more favourable than that provided for in this Agreement, those rules shall, to the extent that they are more favourable, prevail over this Agreement.

2. Where one Contracting Party has agreed with investors of the other Contracting Party to terms more favourable than those of this Agreement, those terms shall not be affected by this Agreement.

Article IX. Principle of subrogation

Where one Contracting Party or an agency designated by it has made a payment by virtue of an insurance contract or guarantee against non-commercial risks in respect of an investment made by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the principle of subrogation of any right or entitlement of that investor to the former Contracting Party or its designated agency as well as the right of the former Contracting Party or its designated agency to exercise, by virtue of said subrogation, any right or entitlement in the place of the former owner. Such transfer shall enable the former Contracting Party or the agency designated by it to be the direct beneficiary of any indemnity or compensation payments to which the initial investor might be entitled.

Article X. Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall, to the extent possible, be settled through the diplomatic channel.

2. If a dispute cannot be thus settled within six months from the start of the negotiations, it shall, at the request of either of the two Contracting Parties, be submitted to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator and these two arbitrators shall select a national of a third State as president. The arbitrators shall be appointed within three months and the president within five months from the date on which either of the two Contracting Parties communicates to the other Contracting Party its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the necessary appointments have not been made within the period specified in paragraph 3 of this article, either Contracting Party, in the absence of any other agreement, may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is prevented from acting or is a national of either Contracting Party, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from acting or is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the next most senior member of the International Court of Justice who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall issue its ruling in accordance with the provisions of the present Agreement or other agreements in force between the Contracting Parties and the universally recognized principles of international law.

6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedures.

7. The tribunal shall take its decision by a majority of votes, and such decision shall be final and binding on both parties.

8. Each Contracting Party shall defray the expenses of the arbitrator appointed by it and of its representation in the arbitral proceedings. The remaining expenses, including those of the president, shall be shared equally by the two Contracting Parties.

Article XI. Disputes between a Contracting Party and investors of the other Contracting Party

1. Any investment-related dispute which may arise between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party with respect to the issues regulated by this Agreement shall be notified in writing by the investor, together with a detailed report, to the Contracting Party receiving the investment. The parties to the dispute shall, as far as possible, endeavour to settle such differences amicably.

2. If the dispute cannot be thus settled within six months from the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the investor may submit the dispute to:

(a) The competent courts of the Contracting Party in whose territory the investment was made; or

(b) One of the following international arbitral tribunals:

(i) The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature in Washington on 18 March 1965, after both States Parties to this Agreement have acceded to it;

(ii) Where either of the Contracting Parties is not a Contracting State of ICSID, the dispute shall be settled in accordance with the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-finding Proceedings by the Secretariat of ICSID;

(iii) An ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), where neither of the Contracting Parties is a party to ICSID.

3. When an investor submits a dispute to an arbitral tribunal, this decision shall be final. Where the investor submits a dispute to the competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made, the national court may also refer the dispute to the arbitral tribunals referred to in the present article, provided that the said court has not handed down a ruling. In the latter case, the investor shall take such measures as are necessary to terminate the judicial proceeding under way.

4. Arbitration shall be based on:

(a) The provisions of the present Agreement and of other agreements concluded between the Contracting Parties;

(b) The national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules on conflict of laws; and

(c) The generally accepted rules and principles of international law.

5. The Contracting Party which is a party to the dispute may not invoke in its defence the fact that the investor, by virtue of an insurance contract or guarantee, received or will receive an indemnity or other compensation, in full or in part, for the losses suffered.

6. The arbitral decisions shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to carry out the decision in accordance with its national law.

Article XII. Entry into force, extension and termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties notify each other that their respective constitutional formalities for the entry into force of international agreements have been completed. It shall remain in force for an initial period of 10 years and shall thereafter be extended indefinitely, unless either of the Contracting Parties terminates it in accordance with paragraph 3 of the present article.

2. Either Contracting Party may terminate this Agreement by giving written notice six months before the date of expiry.

3. The provisions contained in the preceding articles of this Agreement shall remain in force for an additional period of 10 years from the date of termination with respect to investments made before the date of termination of this Agreement.

In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed the present Agreement.

Done at San José, Costa Rica, in two originals, in the Spanish language, both copies being equally authentic, on 8 July 1997.

For the Kingdom of Spain:

IGNACIO AGUIRRE BORREL
Ambassador of Spain

For the Republic of Costa Rica:

JOSÉ MANUEL SALAZAR XIRINACHS
Minister of Exterior Commerce

Exchange of notes
I
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

R.E.I.

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Costa Rica in Spain and has the honour to refer to the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Costa Rica, which was signed in San José on 8 July 1997. An error has been noted on page 13 of the signed text (a photocopy of which is attached) and also of the initialled text.

Article XII, paragraph 1 (end of the paragraph)

Where it states "... in accordance with paragraph 3 of the present article", it should state instead "... in accordance with paragraph 2 of the present article".

If the authorities of the Republic of Costa Rica are in agreement with this correction to the signed text and so indicate in a note verbale, then this exchange of notes will permit the text of the Agreement to be corrected before it is submitted to the Spanish Parliament for ratification and subsequent promulgation.

The Ministry of Foreign Affairs takes this opportunity , etc.

The Embassy of the Republic of Costa Rica in Madrid

II
EMBASSY OF COSTA RICA

MADRID, SPAIN

Ref. No. 555/97

The Embassy of Costa Rica presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to note verbale No. 19/18 of 17 September 1997. The Embassy of Costa Rica wishes to inform the Ministry of Foreign Affairs in this regard that the Costa Rican authorities have agreed that paragraph 1 of article XII of the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of Spain and the Republic of Costa Rica should be corrected. Attached hereto is a photocopy of the letter under reference number DNCI-143-97, dated 9 October 1997, from Mr. Jaime Granados Brenes, Director of International Trade Negotiations of the Ministry of Foreign Trade of Costa Rica addressed to His Excellency Mr. Víctor Ibáñez- Martín Mellado, Ambassador of the Kingdom of Spain in San José, Costa Rica.

The Embassy of Costa Rica takes this opportunity, etc.

Madrid, 25 November 1997

The Ministry of Foreign Affairs
Madrid

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

SAN JOSÉ, COSTA RICA

San José, 9 October 1997

DNCI-143-97

Sir,

With reference to the note verbale received by the Ministry of Foreign Affairs of Spain concerning the error discovered in article XII, paragraph 1, of the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between the Republic of Costa Rica and the Kingdom of Spain, in both the signed and initialled texts, I wish to inform you that Costa Rica agrees to the insertion of the proposed correction.

Accordingly, the last sentence of paragraph 1 of article XII should read:"in accordance with paragraph 2 of the present article." This modification shall be incorporated in the text to be submitted to the legislature for approval and subsequent promulgation. I should be grateful if you would communicate our approval of the above-mentioned change to your authorities.

Accept, Sir, etc.

JAIMÉ GRANADOS BRENES
Director of International Trade Negotiations

His Excellency Mr. Víctor Ibáñez-Martín Mellado
Ambassador of the Kingdom of Spain
San José, Costa Rica

c.c. Rose-Marie Karpinski de Murillo
Ambassador of Costa Rica to Spain
Luis Guillermo Solis
Director General of Foreign Policy

[TRANSLATION - TRADUCTION]¹

ACCORD SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA

Le Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica ci-après "les Parties Contractantes",

Désireux d'intensifier la coopération économique au bénéfice réciproque des deux pays,

Se proposant de créer des conditions favorables pour les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie et,

Reconnaissant que l'encouragement et la protection des investissements conformément au présent Accord stimulent les initiatives dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme "investisseurs" désigne concernant les Parties Contractantes :

a) Les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'une des Parties Contractantes conformément à sa législation.

b) Les entreprises, à savoir, les personnes juridiques y compris les sociétés, les associations des précédentes, les corporations, les sociétés commerciales et toute autre organisation constituée ou en tout cas, dûment organisée conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui ait son siège ou domicile sur le territoire de ladite Partie Contractante indépendamment du fait que son activité ait ou non un but lucratif.

2. Le terme "investissements" désigne toute sorte d'actifs que l'investisseur d'une Partie Contractante investit sur le territoire de l'autre Partie Contractante et en particulier, mais non exclusivement, les suivants :

a) Les actions, les titres, les obligations et toutes autres formes de participation à des sociétés;

b) Les obligations, crédits ou tout autre droit à des prestations contractuelles qui aient une valeur économique. Les prêts seront inclus à condition qu'ils soient liés à un investissement;

c) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages, usufruits et droits analogues;

d) Les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d'auteurs et les droits connexes; les droits de propriété industrielle tels que les marques de fabrication ou de com-

1. Translation supplied by Spain - Traduction fournie par l'Espagne

merce, les appellations d'origine ou les indications géographiques, les dessins, les modèles industriels, les brevets et fonds de commerce ou droit de clef;

e) Les droits accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, pour réaliser des activités économiques et commerciales y compris les concessions pour la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

Aucune modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d'investissement.

De même, on considérera comme investissements, les investissements réalisés sur le territoire d'une Partie Contractante par des entreprises de cette même Partie Contractante qui soient effectivement contrôlées par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Pour plus de précision, on considérera qu'une entreprise d'une Partie est effectivement contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante quand ces derniers ont le pouvoir de nommer la majorité de ses directeurs ou de diriger légalement ses opérations d'une autre façon.

3. Le terme "revenus d'investissement" désigne toute recette rapportée par un investissement et en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, royalties et redevances.

4. Le terme "territoire" comprend l'espace terrestre, l'espace aérien et la mer territoriale de chacune des Parties Contractantes ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étend au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties Contractantes sur lesquels celles-ci ont ou puissent avoir, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins d'exploitation, d'exploration et de protection des ressources naturelles.

Article II. Promotion et admission des investissements

1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à encourager et à créer des conditions favorables pour la réalisation des investissements sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet ces investissements conformément à ses dispositions légales.

2. Dans le but d'augmenter les flux d'investissement, chaque Partie Contractante s'efforcera, sur la demande de l'autre Partie Contractante, d'informer cette dernière des opportunités d'investissement sur son territoire.

3. Quand une Partie Contractante a admis un investissement sur son territoire, elle accordera, conformément à sa législation et ses règlements, les permis nécessaires pour cet investissement ainsi que ceux requis pour l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante accorde, conformément à sa législation, quand cela est nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou de personnel qualifié, quelque soit leur nationalité.

4. Le présent accord sera également appliqué, à partir de son entrée en vigueur, aux investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de celui-ci par les investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Article III. Protection

1. Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante devront recevoir à tout moment un traitement juste et équitable et feront l'objet d'une sécurité et protection pleines et entières. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder auxdits investissements un traitement non moins favorable que celui requis par le droit international.

2. Aucune des Parties Contractantes n'entravera, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, le fonctionnement, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension et la vente ou, le cas échéant, la liquidation desdits investissements. Chacune des Parties Contractantes s'engage à respecter toute obligation qu'elle aurait contractée concernant les investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Article IV. Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Une fois l'investissement admis, chacune des Parties Contractantes applique, sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à des investissements ou des revenus d'investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d'un État tiers quelconque, si celui-ci est plus avantageux pour l'investisseur.

2. Ce traitement ne s'étend pas aux priviléges qu'une Partie Contractante pourrait accorder aux investisseurs d'un État tiers, en vertu de sa participation ou de son association, présente ou future, à une zone de libre échange, à une union douanière, un marché commun, une union économique et monétaire ou à d'autres institutions d'intégration économique similaires.

3. Dans le traitement accordé conformément au présent article, on n'inclura pas les avantages de toute préférence, traitement ou privilège que l'une quelconque des Parties Contractantes pourrait accorder à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers quelconque en vertu d'un accord international relatif, totalement ou partiellement, à la fiscalité, y compris les accords pour éviter la double imposition ou en vertu de toute législation interne ayant trait, totalement ou principalement, à la fiscalité.

Article V. Nationalisation et expropriation

1. Les investissements ou revenus d'investissement des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre partie Contractante ne feront pas l'objet de nationalisation, d'expropriation ni d'aucune autre mesure ayant des effets similaires (ci-après "expropriation") sauf si ces mesures sont adoptées pour des raisons d'utilité ou d'intérêt publics, conformément aux dispositions légales, sur une base non discriminatoire et accompagnées du paiement d'une indemnité rapide, adéquate et effective.

2. Le montant de l'indemnité sera égal à la juste valeur du marché de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'on adopte la mesure d'expropriation ou avant que le caractère imminent de celle-ci ne soit connu du public, selon ce qui se passera en premier

lieu (ci-après "date d'évaluation"). L'indemnité sera payée dans les meilleurs délais, sera effectivement réalisable et librement transférable.

3. La juste valeur de marché sera calculée dans une monnaie librement convertible au taux de change en vigueur sur le marché pour cette monnaie à la date d'évaluation. L'indemnité produira des intérêts à un taux commercial fixé conformément aux critères du marché pour cette monnaie à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.

4. L'investisseur affecté a le droit, dans le cadre de la législation de la Partie Contractante qui réalise l'expropriation, à ce que son cas soit révisé promptement par l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette Partie Contractante, pour déterminer si l'expropriation et l'évaluation de son investissement est conforme aux dispositions du présent article.

5. Si une Partie Contractante expropriait les actifs d'une entreprise qui soit constituée sur son territoire conformément à sa législation en vigueur et où il existe une participation d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, la première Partie Contractante devra garantir que les dispositions du présent article sont appliquées de façon à garantir auxdits investisseurs une indemnité rapide, adéquate et efficace.

Article VI. Dédommagement pour pertes

1. Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements ou les revenus d'investissement subiraient des pertes dues à la guerre ou à tout conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou tout autre événement similaire bénéficieront, à titre de restitution, d'indemnisation, de compensation ou d'autre dédommagement, d'un traitement non moins favorable que celui que ladite Partie Contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur étant retenu. Les paiements qui en résultent devront être librement transférables.

2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 de cet article, un investisseur d'une Partie Contractante qui subit des pertes dans l'une quelconque des situations visées dans ledit alinéa sur le territoire de l'autre Partie Contractante suite à :

a) La réquisition de ses investissements ou d'une partie de ses investissements par les forces armées ou les autorités de l'autre Partie Contractante, ou

b) La destruction, non requise par la nécessité de la situation, de ses investissements ou de partie de ses investissements par les forces armées ou les autorités de l'autre Partie Contractante,

bénéficiera, de ladite Partie Contractante, d'une restitution ou compensation rapide, adéquate et effective payée en monnaie librement convertible et librement transférable.

Article VII. Transferts

1. Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements liés à leurs investissements et en particulier, mais pas exclusivement, les suivants :

a) Le capital initial et les montants additionnels pour maintenir, accroître et développer l'investissement;

b) Les revenus d'investissement, tels qu'ils ont été définis à l'article I;

c) Les fonds nécessaires pour le remboursement de prêts liés à un investissement;

d) Les indemnités et compensations prévues aux articles V et VI;

e) Le produit de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, d'un investissement;

f) Les salaires et autres rémunérations du personnel engagé en raison d'un investissement;

g) Les paiements dus au titre du règlement de différends.

2. Les transferts visés dans le présent Accord sont effectués sans retard, en monnaie librement convertible au taux de change en vigueur à la date du transfert.

3. Sans préjudice des dispositions de cet article, les Parties Contractantes pourront prendre des mesures, sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi dans le cadre de leur législation pour éviter des actions frauduleuses et veiller au respect des obligations fiscales. Lesdites mesures ne pourront pas affecter la substance des principes visés dans cet article.

4. Les Parties Contractantes s'engagent à accorder aux transferts visés dans le présent article un traitement non moins favorable que celui accordé aux transferts des paiements provenant d'investissements d'investisseurs de tout État tiers.

5. Nonobstant ce qui est stipulé dans le premier alinéa du présent article, chaque Partie Contractante, dans des circonstances exceptionnellement difficiles de sa balance des paiements, pourra établir des contrôles temporaires sur les transferts à condition d'instaurer des mesures ou un programme conforme à des critères admis internationalement. Ces limitations seront établies pour une période de temps limitée, sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi.

Article VIII. Conditions plus favorables

1. Si une réglementation générale ou spéciale en vertu de laquelle il faut accorder aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans cette accord, résultait des dispositions légales de l'une des Parties Contractantes ou des obligations émanant du droit international en marge du présent accord, actuelles ou futures, entre les Parties Contractantes, cette réglementation prévaudra sur le présent Accord si elle est plus favorable.

2. Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui auraient été convenues par l'une des Parties Contractantes avec les investisseurs de l'autre Partie Contractante ne se verront pas affectées par le présent Accord.

Article IX. Principe de subrogation

1. Si une des Parties contractantes ou l'entité désignée par elle effectue un paiement en vertu d'une police d'assurance ou d'une garantie accordée contre des risques non commerciaux pour un investissement réalisé par l'un quelconque de ses investisseurs sur le territoire

de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaît la subrogation de tout droit ou action dudit investisseur en faveur de la première Partie Contractante ou de l'entité désignée par elle d'exercer, par voie de subrogation, tout droit ou action dans la même mesure que son titulaire antérieur. Cette subrogation permettra à la première Partie Contractante ou l'entité désignée par elle d'être bénéficiaire direct de tout paiement pour indemnisation ou compensation auquel l'investisseur initial aurait droit.

Article X. Règlement des différends entre les Parties Contractantes

1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé, autant que possible, par la voie diplomatique.
2. Si le différend ne pouvait pas être réglé de cette façon dans le délai de six mois à compter de la date du début des négociations, il sera soumis, à la demande de l'une quelconque des Parties Contractantes à un tribunal d'arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué de la façon suivante : chaque Partie Contractante désigne un arbitre et les deux arbitres choisissent un ressortissant d'un État tiers comme Président. Les arbitres seront désignés dans le délai de trois mois et le Président dans le délai de cinq mois à compter de la date où l'une quelconque des deux Parties Contractantes a informé l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.
4. Si les désignations nécessaires n'avaient pas été réalisées dans les délais prévus à l'alinéa 3 de cet article, chacune des Parties Contractantes pourra, en l'absence d'un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour internationale de Justice ne pouvait pas remplir cette fonction ou était ressortissant de l'une des Parties Contractantes, on invitera le Vice-Président à effectuer les désignations pertinentes. Si le Vice-Président ne pouvait pas remplir cette fonction ou s'il était ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les désignations seront effectuées par le membre de la Cour internationale de Justice qui le suit en ancien-neté qui ne soit ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
5. Le tribunal d'arbitrage statue sur la base du respect des dispositions contenues dans le présent Accord ou d'autres Accords en vigueur entre les Parties Contractantes, et sur la base des principes universellement reconnus par le droit international.
6. À moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa propre procédure.
7. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des votes et cette décision sera définitive et contraignante pour les deux Parties Contractantes.
8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de l'arbitre désigné par elle et ceux relatifs à sa représentation dans les procédures d'arbitrage. Les autres frais y compris ceux du Président seront supportés, à parts égales, par les deux Parties Contractantes.

Article XI. Règlement des différends entre une Partie Contractante et les investisseurs de l'autre Partie Contractante

1. Tout différend relatif aux investissements pouvant surgir entre l'une des Parties Contractantes et un investisseur de l'autre Partie Contractante concernant des questions régies par le présent Accord, sera notifié par écrit, en y joignant des informations détaillées, par l'investisseur à la Partie Contractante réceptrice de l'investissement. Autant que possible, les parties en litige essayeront de régler ces différends à l'amiable.

2. Si le différend ne pouvait pas être réglé de cette façon dans un délai de six mois, à compter de la date de la notification écrite visée à l'alinéa 1, l'investisseur pourra soumettre le différend :

a) Aux tribunaux compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué; ou

b) À un tribunal d'arbitrage international choisi parmi ceux qui sont énumérés ci-dessous :

i) Au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) créé par la "Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États" ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 quand chaque État partie au présent accord y a adhéré;

ii) Au cas où l'une des Parties Contractantes ne serait pas État partie au C.I.R.D.I. le différend sera réglé conformément au Mécanisme complémentaire pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et de vérification des faits par le secrétariat du C.I.R.D.I.;

iii) À un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué selon le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le Droit commercial international (CNUDMI) quand aucune des Parties Contractantes n'est partie au C.I.R.D.I.

3. Une fois que l'investisseur a soumis le différend à un tribunal d'arbitrage, cette décision sera définitive. Si l'investisseur avait soumis le différend au tribunal compétent de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, il pourra également recourir aux tribunaux d'arbitrage indiqués dans le présent article, à condition que ledit tribunal national n'ait pas rendu de décision. Dans ce cas, l'investisseur pourra adopter les mesures requises afin de se désister de l'instance judiciaire en cours.

4. L'arbitrage se basera sur :

a) Les dispositions du présent Accord et celles d'autres accords conclus entre les Parties Contractantes;

b) Le droit national de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; et

c) Les règles et les principes généralement admis du droit international.

5. La Partie Contractante, partie au différend, ne peut invoquer en sa défense le fait que l'investisseur, en vertu d'une police d'assurance ou de garantie, a perçu ou percevra une indemnité ou une autre compensation couvrant tout ou partie des pertes occasionnées.

6. Les décisions arbitrales sont définitives et contraignantes pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s'engage à exécuter les décisions en conformité avec sa législation nationale.

Article XII. Entrée en vigueur, prorogation et dénonciation

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date où les Parties contractantes se seront通知ées mutuellement l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises pour l'entrée en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur pendant une période initiale de dix ans et sera prorogé indéfiniment sauf si l'une des Parties Contractantes le dénonce conformément à l'alinéa 3 de cet article.

2. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer le présent Accord moyennant notification préalable par écrit, six mois avant sa date d'expiration.

3. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date de dénonciation du présent Accord, les dispositions contenues dans les autres articles de cet Accord continueront à être en vigueur pendant une période additionnelle de dix ans à compter de la date de la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à San José de Costa Rica, le 8 juillet 1997, en deux exemplaires originaux, en langue espagnole, chacun des textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

IGNACIO AGUIRRE BORRELL

AMBASSADEUR D'ESPAGNE

Pour la République du Costa Rica :

JOSÉ MANUEL SALAZAR XIRINACHS

MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Échange de notes

I

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

R.E.I.

NOTE VERBALE

Le Ministère des affaires étrangères du Royaume d'Espagne présente ses compliments à l'Ambassade de la République du Costa Rica en Espagne et a l'honneur de se référer à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica, signé à San José le 8 juillet 1997, dans le texte duquel (tant celui qui a été signé que celui qui a été paraphé) une erreur a été relevée, à la page 13 de l'original, dont une photocopie est jointe à la présente note.

Article XII à la fin du paragraphe 1

Remplacer les mots "... conformément à l'alinéa 3 de cet article" par les mots "... conformément à l'alinéa 2 de cet article".

Si les autorités de la République du Costa Rica approuvent cette correction au texte signé et le font savoir par une note, l'échange de notes ainsi effectué permettra de corriger le texte de l'Accord avant sa présentation aux Cortes d'Espagne, en vue de sa ratification et de sa publication.

Le Ministère des affaires étrangères, etc.

Madrid, le 17 septembre 1997

À l'Ambassade de la République du Costa Rica à Madrid

II

AMBASSADE DU COSTA RICA

MADRID (ESPAGNE)

Réf. N 555/97

L'Ambassade du Costa Rica présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de l'Espagne et, se référant à la note n° 19/18 du 17 septembre 1997 du Ministère, a l'honneur de porter à sa connaissance l'approbation, par les autorités costa-riciennes, de la modification apportée au texte du paragraphe 1 de l'article XII de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica. La photocopie de la lettre D.N.C.I.-143-97, signée le 9 octobre 1997 par Don Jaime Granados Brenes, Directeur des Négociations commerciales internationales au Ministère du commerce extérieur du Costa Rica, adressée à Son Excellence Don Víctor Ibáñez-Martín Mellado, Ambassadeur du Royaume d'Espagne à San José (Costa Rica) est jointe à la présente.

L'Ambassade du Costa Rica, etc.

Madrid, le 25 novembre 1997

Au Ministère des affaires étrangères, Madrid

MINISTÈRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR, SAN JOSÉ (COSTA RICA)

San José, le 9 octobre 1997

D.N.C.I.-143-97

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai pris bonne note de la réception, par le Ministère des affaires étrangères de l'Espagne, de la note relative à l'erreur qui a été relevée au paragraphe 1 de l'article XII de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume d'Espagne et la République du Costa Rica, tant dans le texte signé que dans celui qui a été paraphé, et j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence le fait que la modification proposée recueille l'agrément du Costa Rica.

Le libellé de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XII deviendrait donc le suivant : "... conformément à l'alinéa 2 de cet article". Cette modification sera incorporée au texte qui sera soumis à l'Assemblée législative pour approbation et publication. Je vous serais très obligé de bien vouloir faire connaître notre accord aux autorités de votre pays.